



SENTENCIA N° 55/08

Barcelona, a 25 de febrero del 2008.

Vistos por la Ilma. Sr^a D^a Araceli Aiguaviva Baulies, Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal 17 de Barcelona, en juicio oral y público, los presentes autos de Procedimiento Abreviado 321/07-A, seguidos por los delitos y faltas que se dirá contra **JUAN VAZQUEZ AMAYA**, DNI 53063599 T, nacido en St^a Coloma de Gramanet, el 18-11-75, hijo de Antonio y Rafaela; en situación de libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador Juan Antonio Satorras Calderón, y defendido por la Letrada Ana Padilla Ramos; y contra **MONTSERRAT MARQUEZ GARCÍA**, DNI 53061571 -L, nacida en Barcelona, el 26-12-74, hija de Miguel y M^a Antonia, en situación de libertad provisional, representada por la Procuradora M^a Paz Lopez Lois, y defendida por el Letrado Julia Villar Redondo; siendo partes acusadoras el Mº FISCAL, y **CARMEN PRADOS RODRÍGUEZ**, representada por el Procurador Carlos Arcas Hernández, y defendida por la Letrada Lydia Lajara Fernández; y **GENERALITAT DE CATALUNYA**, representada por el Procurador Ildefonso Lago Pérez, y defendida por la Letrada Silvia Grau Beltrán.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Los presentes autos dimanan de Diligencias Previas 5559/06, del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona.

Segundo.- Instruido el procedimiento y conferido traslado al Mº Fiscal formuló escrito de acusación contra los ya referidos como autores –cada uno– de un delito de atentado (550, y 551.1º y último inciso CP) en concurso con una falta de lesiones (617.1 CP) y una falta de lesiones (617.2 CP), sin concurrir circunstancia alguna, pidiendo por el delito las penas de 1 año y 4 meses de prisión y accesoria relativa al derecho sobre el sufragio pasivo, y por la primera falta multa de 60 días con cuota diaria de 6 euros, y 30 días de r.p.s., y por la segunda falta multa de 30 días, con la misma cuota diaria y 15 días de r.p.s., y abono de costas y abono conjunto y solidario a favor de la Sr^a Zaragoza en 50 €



por día de lesión y 3000 € por secuelas, y a favor de la Sr^a Prados 1000 € por la agravación del cuadro clínico anterior.

Tercero.- La Generalitat de Catalunya (que inicialmente defendía y representaba a las señoras M^a Dolores Cortadellas, Gloria Zaragoza y Carmen Prados, pero posteriormente solo representó y defendió a las dos primeras) calificó los hechos como constitutivos de un delito de atentado (550 y 551.1 CP), un delito de lesiones (147.2 CP), una falta de lesiones (617.1 CP) y una falta de maltrato de obra (617.2 CP), pidiendo – respectivamente- las penas de 2 años de prisión, accesoria relativa al derecho al sufragio pasivo, y multa de 3 meses con cuota diaria de 6 €; 6 meses multa con cuota diaria de 6 €; y por cada falta multa de 2 meses con cuota diaria de 6 €. En responsabilidades civiles la cantidad que se fije en ejecución de sentencia por lesiones y secuelas.

Cuarto.- Abierto el juicio oral por Auto de 26-4-07, las defensas de los acusados solicitaron su absolución.

Quinto.- Remitida la causa a este Juzgado fue señalada fecha para la celebración del juicio, habiéndose practicado las pruebas de interrogatorio, testificales, periciales y documental, tras lo cual :

La **Generalitat de Catalunya** modificó sus conclusiones provisionales, según escrito adjunto al acta de juicio, calificando los hechos al igual que el Mº Fiscal, pidiendo la condena a penas 1 año y 2 meses de prisión por el delito y las mismas penas que solicitó el Mº Fiscal por cada falta, y añadiendo la petición de condena a las penas accesorias de Prohibición de aproximación al CEIP Eduardo Marquina durante 6 meses; y lectura de la sentencia en la reunión del Consell Escolar del centro. Y pago de costas con inclusión de las de la acusación particular.

La defensa de **Carmen Prados** presentó sus conclusiones según escrito adjunto al acta de juicio:

En cuanto a la 1^a : a consecuencia del empeoramiento o agravación de la patología digestiva de la Sr^a Prados que tuvo de ser intervenida quirúrgicamente de la hernia de hiato en fecha 24-4-07, obteniendo el alta hospitalaria el 26-4-07. D^a Carmen Prados es y era , al tiempo de ocurrir los hechos de autos, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona, adscrita desde el 1-1-04 a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.



En cuanto a la 2^a califica los hechos como un delito de atentado (550 y 551.1 CP en concurso con una falta de maltrato de obra (617.2 CP) o alternativamente en concurso con una falta de amenazas (620.2 CP).

En cuanto a la 3º son autores los acusados.

En cuanto a la 4^a No concurren circunstancias modificativas

En cuanto a la 5^a y solicita – a cada acusado- por el delito de atentado 1 año y 4 meses de prisión y accesoria relativa al derecho al sufragio pasivo; por una falta de maltrato de obra 1 mes multa con cuota diaria de 6 € y 15 días de r.p.s., y alternativamente por una falta de amenazas 20 días multa con cuota diaria de 6 € y los días de r.p.s..

Además el pago conjunto y solidario en responsabilidades civiles de 2000 € , suma que incluye la agravación del cuadro clínico anterior, la intervención quirúrgica sufrida, los días de ingreso hospitalario, así como perjuicios morales derivados de la angustia y ansiedad padecida a consecuencia de los hechos de autos.

Y pago de constas con inclusión de los de la acusación particular.

La defensa del **acusado** solicitó alternativamente la condena por un a falta de lesiones del artº 620.2 CP a la pena de multa de 10 días con cuota diaria de 3 €.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Los acusados JUAN VAZQUEZ AMAYA y MONTSERRAT MARQUEZ GARCÍA, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, acudían regularmente al Colegio Público Eduard Marquina, sito en c/ Jaime Huguet, nº 22 de Barcelona, al que llevaban a su hijo Christian de 5 años, conociendo por ello a la directora del colegio María Dolores Cortadellas Queralt, a la jefa de estudios del colegio Gloria Zaragoza Bas y a la conserje del colegio Carmen Prados Rodríguez.



Las referidas directora y jefa de estudios son funcionarias y la Sr^a Prados es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona, adscrita desde el 1-1-04 a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

Había sido concedido a la familia formada por los acusados así como a dos familias más la posibilidad de que llevaran su hijo al centro escolar – en servicio de guardería - una hora antes de la de apertura del centro (o sea a las 8:30 horas de la mañana), a pesar de que no reunían las condiciones fijadas para disfrutar de ello (al no tener otro hijo en el centro en aquellas fechas) , y se les informó que debían pagar la cantidad simbólica de 5 € mensualmente.

Los acusados llevaron a su hijo Christian al referido servicio de guardería desde el mes de septiembre, a pesar deque no abonaron en ningún momento la referida simbólica cantidad de 5 €, por lo que habían sido requeridos reiteradamente a lo que los acusados hacían caso omiso.

Por todo ello sobre las 8.30 horas del día 11 de octubre de 2006 las ya referidas directora, jefa de estudios y conserje le comunicaron al hermano del menor- que le acompañaba- que acudieran sus padres para hablar del tema, puesto que ya no iban a permitir más que el menor fuera “ colado” al servicio de guardería, puesto que entre otras razones , ello no era educativo para el resto de alumnos del centro.

Al poco rato acudieron al centro escolar los acusados de manera agresiva delante del resto de niños y padres que se hallaban en el lugar, y actuando de común acuerdo y con la intención de amedrentarlas para conseguir su objetivo, y menospreciando el principio de autoridad que representaban en el centro:

Mientras la acusada se encaraba a la directora Sr^a Cortadellas le dijo expresiones como “ el niño entrará a las 8:30 por mi coño porque esto es una escuela pública” “ ya te esperaré en la calle, te pegaré, te mataré”. A su vez el acusado le decía : “pégalas matalas, bueno, ya la encontrarás en la calle”.

Asimismo la acusada con la misma actitud e intención se encaró a la jefa de estudios Sr^a Zaragoza y le dijo expresiones como “ os voy a pegar, te la estás jugando, ya nos encontraremos en la calle, por mi coño”, hasta que finalmente la cogió por el cuello mientras le decía “ mi hijo va a entrar aquí” y la agarró por los brazos dándole empujones al tiempo que el acusado le instaba a continuar con su actitud diciendo “pégalas, matalas, que ya nos encontraremos en la calle”.



Ante todo ello la conserje Sr^a Prados llamó a los Mossos d'Esquadra, tras lo que la acusada, actuando con la misma intención le increpó diciéndole "lameculos, chivata, te voy a coger y te voy a matar, te voy a mandar a mi madre para que te pegue, que es de tu edad" al tiempo que el acusado le decía "cuando salgas a la calle ya te apañaré , te voy a coger a ti y a tu hijo".

A consecuencia de los referidos hechos :

Gloria Zaragoza sufrió una crisis ansioso depresiva, que precisó una primera asistencia médica y 30 días de estabilización, quedándose como secuela agravación de cuadro depresivo, que ha requerido baja laboral y terapia psicofarmacológica que permanece hasta la fecha de celebración de la vista oral, puesto que si bien se aprecia mejoría no ha remitido por completo.

Carmen Prados vivió una situación de estrés postraumático con crisis de ansiedad que reactivó sus patologías digestivas y respiratorias, requiriendo intervención quirúrgica en abril del 2007 para reducir gran hernia de hiatus diafragmático y en el mismo mes también fue intervenida para control de glaucoma, quedándose como secuela un estado depresivo postraumático leve.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de:

Un delito de atentado ,previsto y penado en los artº 550 y 551.^º del vigente Código Penal.

Dicho delito lo es en concurso ideal del artº 77 CP con una falta de lesiones del artº 617.1 del Código Penal, y con una falta de amenazas del artº 620.2 del Código Penal.

II.- El delito de atentado previsto en los artículos 550 y 551.1 y primer inciso del Código Penal requiere como elementos objetivos : A).- El carácter de autoridad, agente de la misma o funcionario público en el sujeto pasivo. B).- Que se halle dicho sujeto pasivo en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. C).-Un acto típico constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave. Como elementos



subjetivos requiere: A).- El conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo, y B).- Como elemento subjetivo del injusto , el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad.

Dicho tipo penal no se refiere únicamente a los funcionarios agentes de las fuerzas del orden público, sino que desde hace varios años- como se verá en la sentencias que se citarán- se ha comprendido dentro de este ilícito penal a todos aquellos profesionales , en especial, los que trabajan como funcionarios – e incluso con el carácter de contratados en algunas ocasiones-dentro de la enseñanza , sanidad y servicios sociales públicos, siempre que se hallen ejerciendo una función pública y conociendo el agresor dicha esencial circunstancia.

Y así lo vemos entre otras en sentencias :

Del Tribunal Supremo de 26-2-1991, con base en el antiguo artº 119 del Código Penal – idéntico al actual artº 24- que consideró funcionario público a un catedrático de universidad agredido tras un examen por un estudiante suspendido.

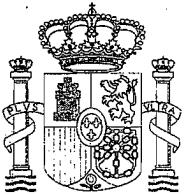
Del Tribunal Supremo ,sentencia nº 1183/1993, de 20 de mayo, que confirmó la condena por delito de atentado por una agresión sufrida por un médico contratado de la Seguridad Social.

De la Audiencia Provincial de Murcia ,del 27-11-95, que consideró atentado la agresión sufrida por un director de colegio público , a manos del padre de un alumno cuyas pretensiones no fueron atendidas por aquél en el desempeño de su función.

De la Audiencia Provincial de Cádiz del 9-11-2000, que estimó atentado el acometimiento a un funcionario jefe de estudios de un colegio público.

De la Audiencia Provincial de Córdoba, de 12-4-06, que consideró atentado la agresión que un alumno produjo a un profesor de un centro oficial de enseñanza.

De la Audiencia Provincial de Cuenca, de 2 y 19 de mayo del 2005, que consideró atentado el acometimiento sufrido por dos profesores de Centros de Menores contratados para desempeñar funciones educadoras asumidas por la Comunidad Autónoma.



Del Tribunal Supremo de 20-5-1993, basándose en otra STS de 15-11-73, que estima que un médico de la seguridad social es funcionario público, así como los enfermeros.

Del Tribunal Supremo , sentencia nº 1030/07, del 4-12-2007, que condeno por delito de atentado por la agresión sufrida por un médico odontólogo del Centro de Asistencia Primaria de Can Gubert del Pla de Girona.

Dicha jurisprudencia- entre otras- parte de la base de la necesidad de protección penal en el ejercicio de las funciones públicas esenciales.Y así se desprende de lo dispuesto en el artº 10.1 de la Constitución Española en relación con los artículos 27 y 43, que plasman los derechos a la educación y a la salud pública. Los poderes públicos deben garantizar el disfrute de tales derechos y el ejercicio de unas funciones desempeñadas por aquellos profesionales a quienes esté a su cargo.Nos hallamos ante la defensa de bienes jurídicos no solo individuales sino también colectivos.

El concepto de funcionario público plasmado en el artº 24.1 del Código Penal no se refiere al concepto jurídico-administrativo , sino a la protección de la pacífica prestación del servicio público encomendado a la Administración, lo que viene proclamado en la propia Constitución .

No se trata de hacer una interpretación extensiva de preceptos penales, puesto que con el acometimiento contra –entre otros- aquellos que ejerce el trabajo de la educación , se degrada la autoridad como concepto necesario en la vida democrática y en el diálogo y respeto mutuo con especial reflejo en las aulas.

III.- La calificación jurídico-penal de los hechos hubiera podido ser otra. Por un lado vemos que se solicita por el Mº Fiscal y por la Generalitat la condena por un solo delito de atentado, y a pesar de que no se menciona a que víctima se refieren, debo entender que solo pueden referirse a la Srª Zaragonza, por cuanto fue la única que recibió acometimiento físico. Por otra parte la defensa de la Srª Prados solicita la condena también por un delito de atentado y solo puede referirse como víctima a dicha señora , por cuanto es únicamente a ella a quien defiende, y procederá la absolución de tal pedimento puesto que no ha quedado acreditado que dicha señora sufriera acometimiento físico alguno.

En tercer lugar vemos como ninguna de las partes solicita la condena por delito de amenazas, a pesar de que se podrían considerar acreditadas – solicitándose únicamente por la defensa de la Srª Prados y alternativamente la condena por falta de amenazas-. Hubiera sido de esperar una calificación por un delito de



atentado en concurso ideal con otros delitos de amenazas y o faltas de amenazas o de lesiones.Tal vez las acusaciones han considerado la aplicación de lo dispuesto en el artº 8 del Código Penal y entienden- a pesar de que no lo han expuesto en momento alguno- la absorción del delito de amenazas por el de atentado- aunque ello solo haría referencia a la Srª Zaragoza. Pero en suma y en base al principio acusatorio que rige en sede penal, no ha lugar a condenar por ilícito penal heterogéneo ni por pena superior a las pedidas por las acusaciones.

Así pues procederá condenar por la comisión por parte de cada acusado de un delito de atentado que hace referencia la víctima Srª Zaragoza; una falta de lesiones que hace referencia a la víctima Srª Zaragoza ; y una falta de amenazas que hace referencia a la Srª Prados.No ha sido solicitada la condena por delito ni falta algunos en cuanto a la víctima Srª Cortadellas .

En modo alguno podrá prosperar la calificación alternativa de la defensa del acusado de condenar por falta del artº 620.2 del Código Penal, respecto a su acción en cuanto a la Srª Zaragoza, puesto que como se verá y como ya se ha reseñado se dan todas los elementos que configuran el tipo penal de atentado.

IV.-Los acusados son autores de los referidos ilícitos penales,por su participación voluntaria y material en su ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal,según resulta de la prueba practicada en el acto del juicio.

Los acusados en la vista oral , haciendo uso de su derecho a no confesarse culpables, han negado los hechos tal y como venían descritos por las acusaciones negando todo insulto y amenaza y reconociendo únicamente que la acusada dio un empujón a la Srª Zaragoza, pero lo quisieron justificar diciendo que ésta había dado antes un golpe a su hijo Christian por lo que éste cayó al suelo - a pesar de que ellos mismos se contradijeron puesto que el acusado dijo acto seguido que no vio caer a su hijo y la acusada también acabó diciendo lo mismo- .Los acusados reconocieron que no tenían derecho a disfrutar del servicio de guardería una hora antes de las 9:30, puesto que no tenían ningún otro hijo en el centro escolar , y que era un favor que se les había concedido, y sabían que se debía pagar la simbólica cantidad de 5 € mensuales, manifestando ambos que habían pagado en septiembre, lo que en modo alguno ha quedado acreditado, antes al contrario puesto que como veremos no llegaron a pagar en momento alguno.

Han alegado los acusado que ellos denunciaron el 17-1-07 que la escuela no había permitido la entrada de su hijo a la guardería a pesar de que habían



acordado con la directora que el 10 de noviembre abonarían los 5 €, pero ninguna prueba han presentado sobre tal acuerdo , y no han reconocido que habían sido requeridos reiteradamente al respecto . Además vemos como dicha denuncia se presentó el 17-1-07, o sea después de haber declarado como imputados en el presente procedimiento a folios 79 y 81 en fecha 13 -12-06.

Los acusados han reconocido que la Sr^a Prados vive cerca de su domicilio.

Por el contrario las pruebas presentadas por las acusaciones han resultado del todo concluyentes y carentes de contradicciones.

Así la directora del centro Sr^a Cortadellas ha ratificado que se había acordado para tres familias- y entre ellas la formada por los acusados- el uso de la guardería, para lo que se les dijo que debían pagar la simbólica cantidad de 5 € mensuales, pero a finales de septiembre la acusada ya manifestó “ que no pensaban pagar si no pagaban los moros”; y que el 10-10-06 ella y la jefe de estudios le dijeron al hermano del menor que debían acudir sus padres para hablar porque no pensaban consentir que se siguiera “ colando” al menor en la guardería lo que- entre otras cosas - no resultaba nada educativo para el resto de alumnos, a lo que dicho hermano del menor llamado Juan las amenazó diciendo que les romperían las gafas; y que acudieron los padres a la escuela muy agresivos, relatando todo lo reseñados en hechos probados y como la acusada cogía al menor utilizándolo a modo de escudo para intentar “colarlo” dentro de la guardería; como la directora se sintió realmente amenazada ; y como fue necesario realizar un asesoramiento para los maestros para restituir el buen clima en la escuela, y haciendo diversas acciones señalando el respeto que debe mediar en toda relación entre las personas.

Por su parte la jefa de estudios Sr^a Zaragoza igualmente ratifico lo ya manifestado en fase de instrucción y lo que se reseña en hechos probados, en el mismo sentido que lo relatado por la directora ; y como ella personalmente el día anterior al de los hechos le dijo al hermano del menor que su madre viniera a hablar porque no pensaban permitir que siguiera “ colando” al niño, relatando con todo detalle todo lo ocurrido y de lo que fueron víctimas junto con la SR^a Prados; y como varios días antes del 11 de octubre se le había dicho a la acusada que podía ir a hablar con la Inspección, lo que no quiso hacer manifestando frases como la de “ moros de mierda”.

La conserje Sr^a Prados igualmente ha ratificado lo que ya dijo en fase de instrucción coincidiendo en todo con el relato de las otras dos perjudicadas y



como temió por su vida y la de su hijo al vivir cerca del domicilio de los acusados.

La Sr^a Isabel Jiménez, profesora de la escuela ha relatado como le explicó la SR^a Zaragoza lo ocurrido y como vio marcas rojas en su cuello.

La Sr^a Carmen Segarra y la SR^a Cristina Sorribes presenciaron la crispación que se creó en la escuela como consecuencia de la violencia empleada por los acusados.

El Sr Juan M^a Verdú ha relatado tal y como obra a folios 96 y 97 todo lo relacionado con que se concedió a los acusados el uso de la guardería a pesar de no reunir los requisitos para ello.

Dichas pruebas de cargo son suficientes para formar en la que resuelve la convicción de culpabilidad de los acusados ,a tenor de lo previsto en el artº 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

V.- No concurre circunstancia alguna modificativa de su responsabilidad criminal.

VI.-De conformidad con lo dispuesto en artículo 110 y 116 del Código Penal toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente, responsabilidad civil que comprenderá la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios.

Ha quedado ampliamente acreditado que la Sr^a Zaragoza, como consecuencia de lo ocurrido sufrió una crisis ansioso depresiva que le provocó la agravación o desestabilización de un cuadro depresivo anterior, que requirió baja laboral que mantienen en la actualidad y terapia psicofarmacológica. Todo ello tal y como consta en informes médicos y médico forenses a folios 11, 146, 147 y 380. En la vista oral el Dr Bach ha relatado como la Sr^a Zaragoza había sufrido con anterioridad una depresión por causas personales y no profesionales, que duró alrededor de un año. Los médicos forenses Dr^a Talón y Dr Pumarega han reseñado que se le reactivó dicha patología previa, siendo el detonante de ello los hechos acreditados, y como en la fecha de los mismos se hallaba de alta y habiendo superado una depresión.

La Sr^a Prados sufrió como consecuencia de los hechos de autos un estrés postraumático con crisis de ansiedad que reactivo su patología respiratoria y digestiva, poniéndose de manifiesto una gran hernia de hiatos que preciso intervención quirúrgica, quedando como secuela un estado depresivo



postaumático leve. Todo ello tal y como es de ver a folios 78, 143, 144, 184 , 377 y doc. adjunta al acta del juicio. En la vista oral el Dr Antonio Riba ha manifestado como una hernia de hiatus se puede poner de manifiesto con motivo de un hecho psicológicamente traumático o de una depresión. Los médicos forenses Dr^a Talón y Dr. Pumarega han señalado como la Sr^a Prados tenía una patología previa latente que no se puso de manifiesto hasta que tuvo lugar el estrés y la ansiedad provocados por lo ocurrido .

Para fijar las cuantías indemnizatorias partiremos de un dato orientativo como lo es lo fijado en la Resolución de 7-1-07, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2007, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

De tal modo que procede- en cuanto a la Sr^a Zaragoza- acordar la cantidad 1500 € resultantes de aplicar 50 € por cada uno de los 30 días de curación o estabilización , y la cantidad de 3000 € por las secuelas aplicándosele la mayor cantidad solicitada por el Mº Fiscal que está próxima a los 5 puntos del Baremo que señala el médico forense.

Respecto a la Sr^a Prados procederá fijar su indemnización por secuelas en 2000 €.

VII.-Por mandato del artº 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe imponerse a los condenados las costas procesales causadas ,por partes iguales y con la inclusión de las de las acusaciones particulares.

VIII.- Procede imponer la pena de prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la escuela CEIP Eduard Marquina – atendida la distancia entre el domicilio de la escuela y el de los acusados-, durante el plazo de seis meses, según lo dispuesto en el artº 57 y concordantes del Código Penal.

Igualmente procede realizar la lectura de la presente resolución – cuando ésta sea firme- en la reunión del Consell escolar, a tenor de lo previsto en el artº 112 del Código Penal.

Vistos los preceptos legales citados y los de general aplicación.



F A L L O

Que condeno a los acusados JUAN VAZQUEZ AMAYA y MONTSERRAT MARQUEZ GARCÍA, como criminalmente responsables en concepto de autores de un delito de Atentado a funcionario en concurso ideal con una falta de lesiones y una falta de amenazas, sin concurrir circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, y les impongo – a cada uno :

Por el delito la pena de UN AÑO de prisión, y la inhabilitación especial para ejercer el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Por la falta de lesiones la pena de MULTA DE SESENTA DIAS, con una cuota diaria de 6 euros .

Por la falta de amenazas la pena de MULTA DE VEINTE DIAS , con una cuota diaria de 6 €.

Se cumplirá por cada día de impago de las multa 2 días de responsabilidad personal subsidiaria.

Asimismo les condeno al pago de las costas por mitad , incluyendo las de las acusaciones particulares.

Por el concepto de responsabilidades civiles abonarán conjunta y solidariamente:

A favor de D^a Gloria Zaragoza Bas la cantidad de 1500 € por los días de curación o estabilización y 3000 € por las secuelas.

A favor de D^a Carmen Prados Rodríguez la cantidad de 2000 e por las secuelas.

Se acuerda la prohibición de aproximación de los acusados a la escuela CEIP Eduard Marquina, a menos de 200 metros, durante el plazo de seis meses.

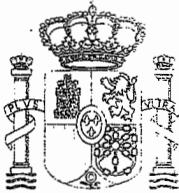
Cuando esta resolución sea firme se le dará lectura en la primera reunión del Consell escolar que se realice.



326107 (13)

Que absuelvo a los acusados de la comisión de un delito de atentado en la persona de D^a Carmen Prados.

Así por ésta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial dentro del plazo de diez días, lo pronuncio, mando y firmo.



SENTÈNCIA núm. 55/08

Barcelona, 25 de febrer de 2008

Vistes per la Il·lma. Sra. Sra Araceli Aiguaviva Baulies, magistrada jutgessa del Jutjat Penal 17 de Barcelona, en judici oral i públic, aquestes actuacions de procediment abreujat 321/07-A, seguides pels delictes i faltes que es diran contra **JUAN VAZQUEZ AMAYA**, DNI [REDACTED], nascut a [REDACTED] [REDACTED] fill d[REDACTED], en situació de llibertat provisional per aquesta causa, representat pel procurador Juan Antonio Satorras Calderón i defensat per la lletrada Ana Padilla Ramos; i contra **MONTSERRAT MARQUEZ GARCIA**, DNI [REDACTED], nascuda a [REDACTED], filla de [REDACTED], en situació de llibertat provisional, representada per la procuradora M^a Paz Lopez Lois i defensada pel lletrat Julia Villar Redondo. Són parts acusadores el **M. FISCAL** i **CARMEN PRADOS RODRÍGUEZ**, representada pel procurador Carlos Arcas Hernández i defensada per la lletrada Lydia Lajara Fernández; i **GENERALITAT DE CATALUNYA**, representada pel procurador Ildefonso Lago Pérez, i defensada per la lletrada Silvia Grau Beltrán.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. Aquestes actuacions provenen de les diligències prèvies 5559/06, del Jutjat d'Instrucció 33 de Barcelona.

Segon. Instruït el procediment i traslladat al M. Fiscal, aquest va formular un escrit d'acusació contra els ja esmentats com a autors –cadascun- d'un delicte d'atemptat (550.1 i 551.1r i últim incís CP) en concurs amb una falta de lesions (617.1 CP) i una falta de lesions (617.2 CP), sense concórrer-hi cap circumstància, en què demana pel delicte les penes d'1 any i 4 mesos de presó i accessòria relativa al dret sobre el sufragi passiu, i per la primera falta multa de 60 dies amb quota diària de 6 euros, i 30 dies de r.p.s., i per la segona falta multa de 30 dies, amb la mateixa quota diària i 15 dies de r.p.s., i abonament de costes i abonament conjunt i solidari a favor de la Sra. Zaragoza en 50 € per dia de lesió i



321/07 A 12

3.000 € per seqüèles, i a favor de la Sra. Prados 1.000 € per l'agreujament del quadre clínic anterior.

Tercer. La Generalitat de Catalunya (que inicialment defensava i representava les senyores M^a Dolores, Glòria Zaragoza i Carmen Prados, però posteriorment solament va representar i defensar les dues primeres) va qualificar els fets com a constitutius d'un delicte d'attemptat (550 i 551.1 CP), un delicte de lesions (147.2 CP), una falta de lesions (617.1 CP) i una falta de maltractament d'obra (617.2 CP), i va demanar – respectivament- les penes de 2 anys de presó, accessòria relativa al dret al sufragi passiu, i multa de 3 mesos amb quota diària de 6 €; 6 mesos multa amb quota diària de 6 €; i per cada falta multa de 2 mesos amb quota diària de 6 €. En responsabilitats civils va demanar la quantitat que es fixi en execució de sentència per lésions i seqüèles.

Quart. Obert el judici oral per la interlocutòria de 26.4.07, les defenses dels acusats van sol·licitar-ne l'absolució.

Cinquè. Remesa la causa a aquest Jutjat, va ser assenyalada data per celebrar el judici, havent-se practicat les proves d'interrogatori, testificals, pericials i documental, i després d'això:

La Generalitat de Catalunya va modificar les seves conclusions provisionals, segons l'escrit adjunt a l'acta de judici, en què qualifica els fets de la mateixa manera que el M. Fiscal, i demana la condemna a penes d'1 any i 2 mesos de presó pel delicte i les mateixes penes que va sol·licitar el M. Fiscal per cada falta, i afegeix la petició de condemna a les penes accessòries de prohibició d'aproximació al CEIP Eduardo Marquina durant 6 mesos; i lectura de la Sentència a la reunió del Consell Escolar del centre, així com al pagament de costes amb inclusió de les de l'acusació particular.

La defensa de Carmen Prados va presentar les seves conclusions segons escrit adjunt a l'acta de judici:

Quant a la 1a, a conseqüència de l'empitjorament o agreujament de la patologia digestiva de la Sra. Prados, que va haver de ser intervençuda quirúrgicament de l'hèrnia d'hiat el dia 24.4.07, i va obtenir l'alta hospitalària el 26.4.07. La Sra. Carmen Prados és i era, quan van esdevenir-se els fets de les actuacions, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Barcelona, adscrita des de l'1.1.04 a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.



Quant a la 2a, qualifica els fets com un delicte d'atemptat (550 i 551.1 CP en concurs amb una falta de maltractament d'obra (617.2 CP) o alternativament en concurs amb una falta d'amenaces (620.2 CP).

Quant a la 3r, són autors els acusats.

Quant a la 4a, no hi concorren circumstàncies modificatives.

Quant a la .5a, sol·licita –a cada acusat– pel delicte d'atemptat 1 any i 4 mesos de presó i accessòria relativa al dret al sufragi passiu; per una falta de maltractament d'obra 1 mes multa amb quota diària de 6 € i 15 dies de r.p.s., i alternativament per una falta d'amenaces 20 dies multa amb quota diària de 6 € i els dies de r.p.s.

A més, demana el pagament conjunt i solidari en responsabilitats civils de 2.000 € , suma que inclou l'agreujament del quadre clínic anterior, la intervenció quirúrgica soferida, els dies d'ingrés hospitalari, així com perjudicis morals derivats de l'angoixa i ansietat patida a conseqüència dels fets de les actuacions.

Sol·licita el pagament de costes amb inclusió dels de l'acusació particular.

La defensa de l'**acusat** va sol·licitar alternativament la condemna per un a falta de lesions de l'art. 620.2 CP a la pena de multa de 10 dies amb quota diària de 3 €.

FETS PROVATS

ÚNIC.- Els acusats JUAN VAZQUEZ AMAYA i MONTSERRAT MARQUEZ GARCÍA, tot dos majors d'edat i sense antecedents penals, acudien regularment al Col·legi Públic Eduard Marquina, situat al c/ Jaume Huguet, núm. 22, de Barcelona, al qual portaven el seu fill Christian, de 5 anys, per la qual cosa coneixien la directora del Col·legi, María Dolores Cortadellas Queralt, la cap d'estudis del Col·legi, Glòria Zaragoza Bas i la conserge del Col·legi, Carmen Prados Rodríguez.

Les esmentades directora i cap d'estudis són funcionàries i la Sra. Prados és funcionària de carrera de l'Ajuntament de Barcelona, adscrita des de l'1.1.04 a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.



327/67 A.6

Havia estat concedit a la família formada pels acusats, així com a dues famílies més, la possibilitat que portessin el seu fill al centre escolar –en servei de guarderia– una hora abans de la d'obertura del centre (és a dir, a les 8.30 hores del matí), malgrat que no reunien les condicions fixades per gaudir-ne (ja que no tenien un altre fill al centre en aquelles dates), i se'ls va informar que havien de pagar la quantitat simbòlica de 5 € mensualment.

Els acusats van portar el seu fill Christian a l'esmentat servei de guarderia des del mes de setembre, malgrat que no van abonar en cap moment la indicada simbòlica quantitat de 5 €, i per aquest motiu havien estat requerits reiteradament, a la qual cosa els acusats feien cas omís.

Per tot això, cap a les 8.30 hores del dia 11 d'octubre de 2006, les ja esmentades directora, cap d'estudis i conserge van comunicar al germà del menor -que l'acompanyava- que els seus pares hi havien d'anar per parlar-ne, ja que ja no permetrien més que el menor fos *colat* al servei de guarderia, ja que, entre altres raons, això no era educatiu per a la resta d'alumnes del centre.

Al cap de poca estona els acusats van acudir al centre escolar de manera agressiva davant de la resta de nens i pares que hi havia, i actuant de comú acord i amb la intenció d'acovardir-les per aconseguir el seu objectiu, i menyspreant el principi d'autoritat que representaven al centre:

Mentre l'acusada s'encarava a la directora, Sra. Cortadellas, li va dir expressions com “el niño entrará a las 8:30 por mi coño porque esto es una escuela pública”, “ya te esperaré en la calle, te pegaré, te mataré”.

Alhora l'acusat li deia: “pégalas, mátalas; bueno, ya la encontrarás en la calle”. Així mateix, l'acusada, amb la mateixa actitud i intenció es va encarar a la cap d'estudis, Sra. Zaragoza, i li va dir expressions com “os voy a pegar, te la estás jugando, ya nos encontraremos en la calle, por mi coño”, fins que finalment la va agafar pel coll mentre li deia “mi hijo va a entrar aquí”, i la va agafar pels braços donant-li empentes mentre l'acusat la instava a continuar la seva actitud dient “pégalas, mátalas, que ya nos encontraremos en la calle”.

Davant de tot plegat, la conserge, Sra. Prados, va trucar als Mossos d'Esquadra, i després l'acusada, actuant amb la mateixa intenció, la va increpar dient-li “lameculos, chivata, te voy a coger y te voy a matar, te voy a mandar a mi madre para que te pegue, que es de tu edad”, mentre l'acusat li deia “cuando salgas a la calle ya te apañaré, te voy a coger a ti y a tu hijo”.



321/62 A/S

A conseqüència dels fets esmentats:

Glòria Zaragoza va patir una crisi ansiosa depressiva, que va necessitar una primera assistència mèdica i 30 dies d'estabilització; va quedar-li com a seqüela un agreujament de quadre depressiu, que ha requerit baixa laboral i teràpia psicofarmacològica que es manté fins a la data de celebració de la vista oral, ja que si bé s'aprecia millora no ha remès completament.

Carmen Prados va viure una situació d'estrés posttraumàtic amb crisis d'ansietat que va reactivar les seves patologies digestives i respiratòries, i que va requerir intervenció quirúrgica l'abril del 2007 per reduir una gran hèrnia de hiat diafragmàtic, i el mateix mes també va ser intervençuda per a control de glaucoma, i li va quedar com a seqüela un estat depressiu posttraumàtic lleu.

FONAMENTS DE DRET

I. Els fets declarats provats són legalment constitutius de:

Un delicte d'atemptat, previst i penat als art. 550 i 551 del vigent Codi penal.

L'esmentat delicte ho és en concurs ideal de l'art. 77 CP amb una falta de lesions de l'art. 617.1 del Codi penal, i amb una falta d'amenaces de l'art. 620.2 del Codi penal.

II. El delicte d'atemptat previst en els articles 550 i 551.1 i primer incís del Codi penal requereix com a elements objectius : A) El caràcter d'autoritat, agent d'aquesta o funcionari públic en el subjecte passiu. B) Que l'esmentat subjecte passiu es trobi en l'exercici de les funcions del seu càrrec o amb motiu d'aquestes.

C) Un acte típic constituït per l'abraonament, ús de la força, intimidació greu o resistència activa també greu. Com a elements subjectius requereix: A) El coneixement per part del subjecte actiu de la qualitat i activitat del subjecte passiu, i B) Com element subjectiu de l'injust, el dol d'ofendre, denigrar o desconèixer el principi d'autoritat.

L'esmentat tipus penal no es refereix únicament als funcionaris agents de les forces de l'ordre públic, sinó que des de fa uns quants anys -com es veurà en les sentències que se citaran- s'han comprès dins d'aquest il·lícit penal tots els



professionals, en especial els que treballen com a funcionaris –i fins i tot amb el caràcter de contractats en algunes ocasions– i dins de l'ensenyament, sanitat i serveis socials públics, sempre que es trobin exercint una funció pública i si l'agressor coneix la circumstància essencial esmentada.

I així ho veiem, entre d'altres, en sentències :

Del Tribunal Suprem, de 26.2.1999, que es basa en l'antic art. 119 del Codi penal –idèntic a l'actual art. 24–, que va considerar funcionari públic un catedràtic d'universitat agredit després d'un examen per un estudiant suspès.

Del Tribunal Suprem, Sentència núm. 1183/1993, de 20 de maig, que va confirmar la condemna per delicte d'attemptat per una agressió soferta per un metge contractat de la Seguretat Social.

De l'Audiència Provincial de Múrcia del 27.11.95, que va considerar attemptat l'agressió soferta per un director de col·legi públic, a mans del pare d'un alumne les pretensions del qual no van ser ateses per aquell en l'acompliment de la seva funció.

De l'Audiència Provincial de Cadis, del 9.11.2000, que va estimar attemptat l'abraonament a un funcionari, cap d'estudis d'un col·legi públic.

De l'Audiència Provincial de Còrdova, de 12.4.06, que va considerar attemptat l'agressió que un alumne va produir a un professor d'un centre oficial d'ensenyament.

De l'Audiència Provincial de Conca, de 2 i 19 de maig del 2005, que va considerar attemptat l'abraonament sofert per dos professors de centres de menors contractats per desenvolupar funcions educadores assumides per la Comunitat Autònoma.

Del Tribunal Suprem, de 20.5.1993, que pren com a base una altra STS de 15.11.73, que estima que un metge de la seguretat social és funcionari públic, així com els infermers.

Del Tribunal Suprem, Sentència núm. 1030/07, del 4.12.2007, que va condemnar per delicte d'attemptat per l'agressió soferta per un metge odontòleg del Centre d'Assistència Primària de Can Gubert del Pla de Girona.



L'esmentada jurisprudència -entre d'altres- parteix de la base de la necessitat de protecció penal en l'exercici de les funcions públiques essencials. I així es desprèn del que disposa l'art. 10.1 de la Constitució espanyola en relació amb els articles 27 i 43, que plasmen els drets a l'educació i a la salut pública. Els poders públics han de garantir el gaudi de tals drets i l'exercici d'unes funcions desenvolupades per aquells professionals als quals estigui a càrrec seu. Ens trobem davant la defensa de béns jurídics, no solament individuals, sinó també col·lectius.

El concepte de funcionari públic plasmat en l'art. 24.1 del Codi penal no es refereix al concepte juridicoadministratiu, sinó a la protecció de la pacífica prestació del servei públic encomanat a l'Administració, cosa que es proclama en la mateixa Constitució.

No es tracta de fer una interpretació extensiva de preceptes penals, ja que amb l'abraonament contra -entre d'altres- aquells que exerceixen el treball de l'educació, es degrada l'autoritat com a concepte necessari en la vida democràtica i en el diàleg i respecte mutu amb especial reflex en les aules.

III. La qualificació jurídicopenal dels fets hagués pogut ser una altra. D'una banda, veiem que el Ministeri Fiscal i la Generalitat sol·liciten la condemna per un sol delicte d'attemptat, i tot i que no esmenten a quina víctima es refereixen, he d'entendre que només poden referir-se a la Sra. Zaragoza, ja que va ser l'única que va rebre abraonament físic. D'altra banda, la defensa de la Sra. Prados també sol·licita la condemna per un delicte d'attemptat i només pot referir-se com a víctima a aquesta senyora, ja que únicament la defensa a ella, i pel que fa a aquesta petició serà procedent l'absolució, ja que no ha quedat acreditat que aquesta senyora patís cap abraonament físic.

En tercer lloc, veiem com cap de les parts sol·licita la condemna per delicte d'amenaces, malgrat que es podrien considerar acreditades -únicament la defensa de la Sra. Prados sol·licita, i alternativament, la condemna per una falta d'amenaces-. S'hagués pogut esperar una qualificació per un delicte d'attemptat en concurs ideal amb altres delictes d'amenaces i/o faltes d'amenaces o de lesions. Potser les acusacions han considerat aplicable el que disposa l'article 8 del Codi penal i entenen -tot i que no ho han exposat en cap moment- que el delicte d'attemptat absorbeix el delicte d'amenaces- encara que això només faria referència a la Sra. Zaragoza. Però en suma i en base al principi acusatori que regeix en seu penal, no escau condemnar per un il·lícit penal heterogeni ni per una pena superior a les demandades per les acusacions.



321/0 + A.3

Per tant, serà procedent condemnar cadascun dels acusats per la comissió d'un delicte d'attemptat que fa referència a la víctima Sra. Zaragoza; una falta de lesions que fa referència a la víctima Sra. Zaragoza, i una falta d'amenaces que fa referència a la Sra. Prados. No s'ha sol·licitat la condemna per cap delicte ni falta pel que fa a la víctima Sra. Cortadellas.

No pot properar de cap manera la qualificació alternativa de la defensa de l'acusat de condemnar per una falta de l'article 620.2 del Codi penal, respecte a la seva acció quant a la Sra. Zaragoza, ja que, com es veurà i com ja s'ha detallat, es donen totes els elements que configuren el tipus penal d'attemptat.

IV. Els acusats són autors dels il·lícits penals esmentats per la seva participació voluntària i material en l'execució, conforme al que disposen els articles 27 i 28 del Codi penal, segons el que resulta de la prova practicada en l'acte del judici.

Els acusats, a la vista oral, fent ús del seu dret a no confessar-se culpables, han negat els fets tal com els havien descrit les acusacions. Han negat tot els insults i les amenaces i han reconegut únicament que l'acusada va donar una empenta a la Sra. Zaragoza, però ho van voler justificar dient que ella havia donat abans un cop al seu fill Christian, per la qual cosa aquest va caure a terra –tot i que ells mateixos es van contradir, ja que l'acusat va dir tot seguit que no va veure caure el seu fill i l'acusada també va acabar dient el mateix–. Els acusats van reconèixer que no tenien dret a gaudir del servei de guarderia una hora abans de les 9.30, ja que no tenien cap altre fill en el centre escolar, i que era un favor que se'ls havia concedit, i sabien que calia pagar la simbòlica quantitat de 5€ mensuals. Tots dos van manifestar que havien pagat al setembre, la qual cosa no ha quedat acreditada de cap manera, ans al contrari, ja que com veurem no van arribar a pagar en cap moment.

Els acusat han al·legat que el 17-1-07 van denunciar que l'escola no havia permès l'entrada del seu fill a la guarderia, malgrat que amb la directora havien acordat que el 10 de novembre abonarien els 5€, però no han presentat cap prova d'aquest acord, i no han reconegut que havien estat requerits reiteradament per aquest motiu. A més, veiem que la denúncia esmentada es va presentar el 17-1-07, és a dir, després d'haver declarat com a imputats en aquest procediment en els folis 79 i 81 en data 13-12-06.

Els acusats han reconegut que la Sra. Prados viu a prop del seu domicili.

Per contra, les proves presentades per les acusacions han resultat del tot concloents i no tenen contradiccions.



Així, la directora del centre, la Sra. Cortadellas, ha ratificat que s'havia acordat per a tres famílies –i entre elles la formada pels acusats– l'ús de la guarderia, per la qual cosa se'ls va dir que havien de pagar la simbòlica quantitat de 5€ mensuals, però a finals de setembre l'acusada ja va manifestar “que no pensaven pagar si no pagavan los moros”; que el 10-10-06 ella i la cap d'estudis van dir al germà del menor que els seus pares hi havien d'anar a parlar perquè no pensaven consentir que se seguís *colant* el menor a la guarderia, cosa que –entre d'altres coses– no resultava gens educativa per a la resta d'alumnes, a la qual cosa l'esmentat germà del menor, anomenat Juan, les va amenaçar dient que els trencarien les ulleres; i que els pares van anar a l'escola molt agressius, relatant tot el que s'ha detallat en els fets provats i com l'acusada agafava el menor i l'utilitzava com si fos un escut per intentar *colar-lo* dins de la guarderia; com la directora es va sentir realment amenaçada, i com va caldre realitzar un assessorament per als mestres per restituir el bon clima a l'escola, i fer diverses accions remarcant el respecte que hi ha d'haver en tota relació entre les persones.

Per la seva banda, la cap d'estudis, la Sra. Zaragoza, igualment va ratificar el que ja havia manifestat en la fase d'instrucció i el que es detalla en els fets provats, en el mateix sentit que el que havia explicat la directora; com ella personalment el dia anterior al dels fets li va dir al germà del menor que la seva mare vingués a parlar perquè no pensaven permetre que seguís *colant* el nen, i va relatar amb tots els detalls tot el que va passar i del que van ser víctimes juntament amb la Sra. Prados; i com diversos dies abans de l'11 d'octubre se li havia dit a l'acusada que podia anar a parlar amb la Inspecció, cosa que no va voler fer i va dir frases com la de “moros de mierda”.

La conserge, la Sra. Prados, igualment ha ratificat el que ja va dir en la fase d'instrucció, coincidint en tot amb el relat de les dues altres perjudicades, i com va témer per la seva vida i la del seu fill, atès que viuen a prop del domicili dels acusats.

La Sra. Isabel Jiménez, professora de l'escola, ha relatat com la Sra. Zaragoza li va explicar el que havia passat i com va veure marques vermelles en el seu coll.

La Sra. Carmen Segarra i la Sra. Cristina Sorribes van presenciar la crispació que es va crear a l'escola com a conseqüència de la violència utilitzada pels acusats.

El Sr. Juan M. Verdú ha relatat, tal com consta en els folis 96 i 97, tot el que té relació amb el fet que es concedí als acusats l'ús de la guarderia, tot i no reunir els requisits necessaris.



Les proves de càrrec esmentades són suficients per formar, en la persona que resol, la convicció de culpabilitat dels acusats, d'acord amb allò que preveu l'article 741 de la Llei d'enjudiciament criminal.

V. No es dóna cap circumstància modificativa de la seva responsabilitat criminal.

VI. D'acord amb el que disposen els articles 110 i 116 del Codi penal, tota persona responsable criminalment d'un delicte o d'una falta ho és també civilment. La responsabilitat civil comprèn la restitució, la reparació del dany causat i la indemnització de perjudicis.

Ha quedat àmpliament acreditat que la Sra. Zaragoza, com a conseqüència del que va passar, ha patit una crisi ansiosodepressiva que li va provocar l'agreujament o la desestabilització d'un quadre depressiu anterior, que va requerir la baixa laboral, que es manté en l'actualitat, i teràpia psicofarmacològica. Tot això tal com consta en els informes mèdics i mèdicoforenses en els folis 11, 146, 147 i 380. A la vista oral el Dr. Bach ha explicat com la Sra. Zaragoza havia patit amb anterioritat una depressió per causes personals i no professionals, que va durar al voltant d'un any. Els metges forenses Dra. Talón i Dr. Pumarega han explicat que se li va reactivar la patologia prèvia esmentada i que el detonant d'això van ser els fets acreditats, i com, en la data dels fets, es trobava d'alta després d'haver superat una depressió.

La Sra. Prados va patir, com a conseqüència dels fets de les actuacions, un estrès posttraumàtic amb crisis d'ansietat que va reactivar la seva patologia respiratòria i digestiva, i se li va fer palesa una gran hèrnia d'hiat que necessitava una intervenció quirúrgica. Com a seqüela li va quedar un estat depressiu posttraumàtic lleu. Tot això tal com es pot veure en els folis 78, 143, 144, 184, 377 i en la documentació adjunta a l'acta del judici. A la vista oral el Dr. Antonio Riba ha manifestat com una hèrnia d'hiat es pot fer palesa amb motiu d'un fet psicològicament traumàtic o d'una depressió. Els metges forenses Dra. Talón i Dr. Pumarega han explicat que la Sra. Prados tenia una patologia prèvia latent que no es va manifestar fins que va tenir lloc l'estrès i l'ansietat provocats pel que ha passat.

Per fixar les quanties indemnitzatòries partirem d'una dada orientativa com ho és el que va fixar la Resolució de 7-1-07 de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es publiquen les quanties de les indemnitzacions per mort, lesions permanentes i incapacitat temporal que resulten d'aplicar durant



el 2007 el sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

D'aquesta manera és procedent —quant a la Sra. Zaragoza— decidir la quantitat 1500€, que resulten d'aplicar 50€ per cadascun dels 30 dies de curació o estabilització, i la quantitat de 3000€ per les seqüèlies, aplicant-li la quantitat més gran sol·licitada pel Ministeri Fiscal que és a prop dels 5 punts del barem que assenyala el metge forense.

Respecte a la Sra. Prados, és procedent fixar la seva indemnització per seqüèlies en 2000 €.

VII. Per mandat de l'article 123 del Codi penal i 240 de la Llei d'enjudiciament criminal, s'han d'imposar als condemnats les costes processals causades, per parts iguals i amb la inclusió de les de les acusacions particulars.

VIII. És procedent imposar la pena de prohibició d'aproximació a menys de 200 metres de l'escola CEIP Eduard Marquina - atesa la distància entre l'escola i el domicili dels condemnats-, durant el termini de sis mesos, segons el que disposa l'article 57 i els concordants del Codi penal.

Igualment és procedent llegir aquesta resolució —quan sigui ferma— a la reunió del Consell Escolar, d'acord amb el que preveu l'article 112 del Codi penal.

Vistos els preceptes legals esmentats i els d'aplicació general.

DECISIÓ

Condemno els acusats JUAN VAZQUEZ AMAYA i MONTSERRAT MARQUEZ GARCIA, com a criminalment responsables en concepte d'autors d'un delicte d'atemptat a funcionari en concurs ideal amb una falta de lesions i una falta d'amenaces, sense que es doni cap circumstància modificativa de la responsabilitat criminal, i els imposo —a cadascun:

Pel delicte, la pena d'UN ANY de presó i la inhabilitació especial per exercir el dret al sufragi passiu durant el temps de la condemna.



321/7 A/12

Per la falta de lesions, la pena de MULTA DE SEIXANTA DIES, amb una quota diària de 6 euros.

Per la falta d'amenaces, la pena de MULTA DE VINT DIES, amb una quota diària de 6 euros.

Per cada dia d'impagament de les multa s'han de complir 2 dies de responsabilitat personal subsidiària.

Així mateix, els condemno a pagar les costes per meitat, incloent les de les acusacions particulars.

En concepte de responsabilitats civils, han d'abonar, conjuntament i solidàriament:

A favor de Sra. Glòria Zaragoza Bas, la quantitat de 1500€ pels dies de curació o estabilització i 3000€ per les seqüeles.

A favor de Sra. Carmen Prados Rodríguez, la quantitat de 2000€ i per les seqüeles.

Decideixo prohibir l'aproximació dels acusats a l'escola CEIP Eduard Marquina durant el termini de sis mesos, a menys de 200 metres.

Quan aquesta resolució sigui ferma, s'ha de llegir en la primera reunió del Consell Escolar que es realitzi.

Absolc els acusats de la comissió d'un delicte d'attemptat en la persona de la Sra. Carmen Prados.

Aquesta és la meva sentència, de la qual s'ha d'unir una certificació a les actuacions i contra la qual es pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial dins del termini de deu dies.

Així ho disposo, ho mano i ho signo.